

INFORME SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA EN EL MUNDO 2019: PERÚ

Resumen Ejecutivo

La Constitución prohíbe la discriminación basada en la afiliación o las creencias religiosas y prevé la libertad de conciencia y de religión, tanto individualmente como en asociación con otras personas. También prevé la separación de la religión y el estado, aunque reconoce la importancia histórica de la Iglesia Católica Romana. Pequeños grupos religiosos no católicos dijeron estar satisfechos con la eliminación temporal en 2018 del requisito previo de registrarse en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para recibir ciertos beneficios tributarios, de visas y otros servicios gubernamentales. Sin embargo, algunos miembros de minorías religiosas continuaron afirmando que la ley de libertad religiosa mantenía preferencias institucionales para la Iglesia Católica, en particular en lo que respecta a las exenciones fiscales, y buscaban un cambio permanente en la política del gobierno para permitir exenciones para todos los grupos religiosos. El Consejo Interreligioso del Perú continuó dialogando con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que todos los grupos religiosos tengan igual acceso a los beneficios del gobierno, incluyendo exenciones tributarias sobre ingresos, importaciones, propiedades y ventas; visas para trabajadores religiosos y la oportunidad de servir como capellanes militares. El consejo continuó discutiendo las revisiones del gobierno a sus reglamentos en cuanto a la libertad religiosa de las distintas comunidades. En junio, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos organizó un panel de expertos en libertad religiosa y en principios de secularismo y neutralidad del estado. Los panelistas de la Pontificia Universidad Católica del Perú analizaron y explicaron un fallo de la Corte Constitucional de diciembre 2018 que indica que el financiamiento estatal de las escuelas dirigidas por grupos religiosos es inconstitucional porque es incompatible con el principio de laicidad. Algunos miembros de la Iglesia Católica cuestionaron el fallo, afirmando que el laicismo no se mencionaba en la constitución. En enero, el gobernador de la región Junín, Vladimir Cerrón, tuiteó: "Si la izquierda coordina bien su unidad, se enfrentará con éxito a los poderes judío-peruanos en las próximas elecciones generales", en referencia a lo que Cerrón consideró como el control judío de la política y la economía del país. Figuras políticas y medios de comunicación criticaron las declaraciones de Cerrón como antisemitas.

Los líderes de la comunidad judía dijeron que algunos individuos continuaron suscribiendo teorías de conspiración antisemitas sobre los judíos y el Estado de Israel. Tanto los líderes judíos como los musulmanes reiteraron que algunas escuelas públicas y privadas, así como algunos empleadores, no permitían a sus miembros tomar vacaciones en días de festividades religiosas. Grupos religiosos y organizaciones interreligiosas coordinaron con el gobierno, la sociedad civil y las organizaciones internacionales para prestar asistencia humanitaria a algunos de los más de 860.000 venezolanos en el país.

Los funcionarios de la embajada de los Estados Unidos siguieron conversando con representantes del gobierno sobre la ley de libertad religiosa, incluyendo las exenciones fiscales para grupos religiosos, y sus reglamentos de aplicación. En ellas, destacaron la importancia de la igualdad de trato de todos los grupos religiosos en virtud de la ley; y exploraron la forma en que los grupos religiosos podían ayudar con la respuesta humanitaria para los venezolanos en el país. Los funcionarios de la embajada también promovieron la tolerancia y el respeto de la diversidad religiosa junto con los líderes de la Iglesia Católica, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y las comunidades evangélicas, protestantes, judías y musulmanas.

Sección I. Demografía Religiosa

El gobierno de los Estados Unidos estima que la población total es de 31,6 millones (estimación a mediados de 2019). El censo nacional de 2017 informó de que la población era 76% católica (81% en 2007); 14% protestante (principalmente protestante evangélica, en comparación con el 13% en 2007); 5,1% no religiosa; y 4,9% seguidora de otros grupos religiosos. Los otros grupos religiosos incluyen a judíos, musulmanes, testigos de Jehová, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, los Israelitas del Nuevo Pacto Universal (que se definen a sí mismos como protestantes evangélicos), los bahá'ís, los budistas, los cristianos ortodoxos (principalmente rusos y griegos) y la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna.

Según el Congreso Judío Mundial, aproximadamente 3.000 judíos residen en el país, principalmente en Lima, Cusco e Iquitos. Según la Asociación Islámica del Perú, hay aproximadamente 2.600 musulmanes, 2.000 en Lima y 600 en la región de Tacna. La comunidad musulmana de Lima es aproximadamente mitad de origen árabe y mitad de conversos locales,

mientras que la de Tacna es mayormente paquistaní. La mayoría de los musulmanes son suníes.

Algunos pueblos indígenas de la selvas amazónica practican religiones locales tradicionales. Muchas comunidades indígenas en los Andes practican una fe sincrética en la que se mezclan las creencias cristianas y precolombinas.

Sección II. Situación del Respeto del Gobierno por la Libertad de Religión

Marco Legal

La Constitución prohíbe la discriminación y la persecución por motivos de afiliación o creencia religiosa y establece la libertad de religión, ya sea individualmente o en asociación con otros. Establece que toda persona tiene derecho a la privacidad de sus convicciones religiosas. Establece también la separación de la religión y el Estado, pero reconoce el papel de la Iglesia Católica como "un elemento importante en el desarrollo histórico, cultural y moral" del país.

Un concordato entre el gobierno y la Santa Sede otorga a la Iglesia Católica ciertos privilegios institucionales en educación, impuestos e inmigración de trabajadores religiosos. Una ley de libertad religiosa exime a los inmuebles de la Iglesia Católica de los impuestos sobre la propiedad. A menudo, otros grupos religiosos deben pagar impuestos sobre la propiedad de sus escuelas y residencias de funcionarios, dependiendo de la jurisdicción municipal y de si el grupo solicita y recibe la condición de organización sin fines de lucro exenta de impuestos. La ley exime a los trabajadores religiosos católicos de los impuestos sobre los viajes internacionales. El gobierno también exime del impuesto a la renta a todos los ingresos relacionados con el trabajo de los sacerdotes y obispos católicos. En diciembre de 2018 se aprobó una exención temporal de estos impuestos para los grupos religiosos no católicos, válida hasta el 31 de diciembre de 2020. Por ley, las Fuerzas Armadas sólo pueden emplear clérigos católicos como capellanes.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es responsable de dialogar con los grupos religiosos. La inscripción en la Dirección de Justicia y Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es opcional y voluntaria. El propósito declarado del registro es promover la integridad y

facilitar la relación con el gobierno. Los grupos religiosos no tienen que registrarse para obtener beneficios institucionales, pero hacerlo les permite interactuar con el gobierno. El reglamento permite a todos los grupos religiosos, registrados o no, solicitar exenciones fiscales y visas de trabajo o residencia directamente con las instituciones gubernamentales pertinentes. La inscripción es gratuita, el proceso suele durar una semana, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ayuda a completar los formularios de solicitud.

De acuerdo a la ley, todos los reos, independientemente de su afiliación religiosa, pueden practicar su religión y buscar consejo espiritual de alguien de su misma fe.

La ley ordena que todas las escuelas, públicas y privadas, impartan educación religiosa a través de los niveles primario y secundario, "sin violar la libertad de conciencia del estudiante, los padres o los maestros". La ley sólo permite la enseñanza del catolicismo en las escuelas públicas, y el Ministerio de Educación exige que el obispo católico que preside una zona apruebe a los profesores de educación religiosa de las escuelas públicas. Los padres pueden solicitar al director de la escuela que exima a sus hijos de las clases de religión obligatorias. El gobierno puede conceder exenciones del requisito de educación religiosa a las escuelas privadas laicas y a las escuelas religiosas no católicas. Los niños no católicos que asisten a escuelas católicas también están exentos de las clases de catolicismo. La ley establece que las escuelas no pueden perjudicar académicamente a los alumnos que soliciten exenciones de las clases de educación católica. Según un fallo del Tribunal Constitucional de diciembre de 2018, el financiamiento estatal de las escuelas dirigidas por grupos religiosos es inconstitucional porque es "incompatible con el principio de laicidad". El fallo establece que el Estado debe suspender el financiamiento de estas escuelas dentro de un plazo razonable o debe establecer un sistema general y laico de subvenciones para todas las instituciones educativas privadas, independientemente de su afiliación religiosa.

La ley exige a todos los empleadores que se adapten a los días y festividades religiosas de todos los empleados. Esta adaptación incluye permitir que un empleado utilice las vacaciones anuales para este fin.

Los trabajadores religiosos extranjeros deben solicitar una visa a través de la Oficina de Inmigración del Ministerio del Interior. Si el grupo religioso se registra en el Ministerio de Justicia, la Oficina de Inmigración lo acepta como prueba de que el grupo solicitante es una organización religiosa. Si el grupo no

se registra en el Ministerio de Justicia, la Oficina de Inmigración toma su decisión caso por caso.

El país es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Prácticas del Gobierno

Al final del año, el gobierno había registrado 148 grupos no católicos, un aumento con respecto a los 133 de 2018. Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y los grupos interreligiosos locales, el gobierno aceptó y aprobó las solicitudes de todos los grupos religiosos interesados, y no se informó de ningún rechazo. El gobierno puso fin a los requisitos de afiliación mínima en 2018, permitiendo que cualquier grupo se inscribiera voluntariamente independientemente de su tamaño o categorización.

Según el Consejo Interreligioso y los grupos confesionales, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos siguió interactuando con las comunidades religiosas acerca de asuntos que las afectan, como el proceso de inscripción, las exenciones fiscales, las visas de trabajadores religiosos, el apoyo presupuestario a los grupos religiosos y los derechos de los presos a la práctica religiosa. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos siguió interactuando regularmente con los grupos religiosos a través de la Oficina de Asuntos Católicos y la Oficina de Asuntos Interconfesionales, para grupos religiosos no católicos.

Algunos miembros de minorías religiosas siguieron criticando aspectos de la ley acerca de la libertad religiosa del país, afirmando que mantenía preferencias institucionales por la Iglesia Católica, en particular en lo que respecta a las exenciones fiscales. En sus reuniones periódicas con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Consejo Interreligioso siguió presionando para que todos los grupos religiosos tuvieran un acceso igual y permanente a los beneficios del gobierno, incluyendo las exenciones fiscales respecto de ingresos, aranceles de importación, propiedades y ventas; las visas para trabajadores religiosos; y las oportunidades para servir como capellanes militares.

Según la Oficina de Asuntos Católicos del Ministerio de Justicia, el gobierno proporcionó una subvención anual de aproximadamente 2,6 millones de soles

(785.000 dólares) a la Iglesia Católica para los estipendios de los arzobispos y pastores, de acuerdo con el concordato de 1980 con la Santa Sede. Cada una de las 45 jurisdicciones eclesiásticas católicas del país recibió además un subsidio mensual de 1.000 soles (300 dólares) para el mantenimiento y las reparaciones de los inmuebles de la iglesia, a menudo de significativo valor histórico y cultural. Algunos clérigos y laicos católicos empleados por la Iglesia recibieron subsidios del gobierno además de estos fondos. Estos individuos representaban aproximadamente el 8 por ciento del clero católico y de los agentes pastorales. Según los representantes de la Iglesia Católica, la Iglesia usó estos y otros fondos de la Iglesia para prestar servicios humanitarios a los pobres, independientemente de su afiliación religiosa. No ha habido estipendios similares disponibles para otros grupos religiosos.

Los pastores protestantes volvieron a declarar que algunos soldados no católicos seguían teniendo dificultades para encontrar y asistir a servicios religiosos no católicos porque, por ley, sólo los capellanes católicos pueden servir en las Fuerzas Armadas.

En enero, el gobernador de la región Junín, Vladimir Cerrón, tuiteó: "Si la izquierda coordina bien su unidad, se enfrentará con éxito a los poderes judío-peruanos en las próximas elecciones generales", en referencia a lo que Cerrón consideró el control judío de la política y la economía del país. En febrero, dos meses antes de suicidarse, el expresidente Alan García dijo que un periodista que lo acusó de sabotear la lucha contra la corrupción había "traído al país a la mafia judía de (Josef) Maiman" (un promotor inmobiliario israelí-peruano supuestamente involucrado en corrupción). Algunos dirigentes políticos, entre ellos el congresista Alberto de Belaunde, calificaron de "inaceptable" el antisemitismo, y artículos en los medios de comunicación criticaron las observaciones de Cerrón y García por considerarlas antisemitas. La Asociación Judía del Perú calificó los comentarios de García de discriminatorios y declaró que no podían aceptar "expresiones que alimentan ideas de conspiración que no tienen nada que ver con la realidad". En respuesta, García dijo que sus comentarios fueron un lapsus debido a la velocidad de la entrevista.

El compromiso del gobierno con los grupos religiosos incluyó conferencias, talleres y otras reuniones interreligiosas periódicas para discutir el proceso de inscripción, campañas conjuntas de beneficencia, divulgación pública y eventos culturales. El gobierno y los grupos religiosos, incluyendo a la Iglesia

Católica, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y varias iglesias protestantes, asumieron conjuntamente estos compromisos para toda la comunidad.

En junio, funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, entre ellos el entonces Viceministro de Justicia Fernando Castañeda y la Directora de Asuntos Interconfesionales María Esperanza Adrianzén, y varios representantes religiosos de América Latina y el Caribe asociados a la organización internacional Religiones por la Paz celebraron una consulta regional interreligiosa en Lima para promover el desarrollo social y el diálogo interreligioso. La consulta se centró en una visión interconfesional de la paz, la tolerancia, la prevención de conflictos, la promoción del desarrollo sostenible y la protección del ambiente. También incluyó una sesión especial sobre el papel de las comunidades religiosas en respuesta a la crisis migratoria de Venezuela en la región. En el evento, el presidente Martín Vizcarra recibió el premio de Religiones por la Paz por "Paz Positiva".

En junio, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos acogió un panel de expertos sobre la libertad religiosa y los principios de laicidad y neutralidad del Estado, analizando y explicando específicamente el fallo del Tribunal Constitucional de diciembre de 2018 sobre el financiamiento público de escuelas religiosas privadas. Algunos miembros de la Iglesia Católica criticaron el fallo, afirmando que la laicidad no se mencionaba en la constitución, que reconocía el importante papel de la Iglesia en la historia y la cultura del país. El gobierno continuó trabajando en un calendario de implementación para el fallo de 2018 hasta finales de año.

En marzo, la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables asistió a una conferencia organizada por el Consejo Interreligioso centrada en la lucha contra la violencia contra la mujer. La ministra señaló el papel destacado de las comunidades religiosas en el fomento de espacios democráticos, saludables y respetuosos en los que se pueda promover la igualdad entre hombres y mujeres. En octubre, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos invitó a los dirigentes religiosos de la ciudad de Chimbote a participar en una iniciativa denominada "Caravana de la Justicia" para elaborar un programa que promoviera la tolerancia, la solidaridad y el bienestar social como objetivo conjunto del Estado y las comunidades religiosas.

La Asociación Peruana Falun Dafa declaró que, como resultado de la interferencia de la embajada china, la compañía de espectáculos Shen Yun, afiliada a Falun Gong, no pudo reservar lugares públicos a través del Ministerio de Cultura para sus actuaciones comerciales. La asociación dijo que debido a que Shen Yun no pudo reservar lugares de tamaño apropiado, no actuó durante el año.

Sección III. Situación del Respeto de la Sociedad por la Libertad de Religión

El Consejo Interreligioso siguió promoviendo sociedades justas y armoniosas en un marco de respeto, tolerancia y diálogo entre las diferentes tradiciones religiosas. Continuó su diálogo entre las entidades religiosas, incluyendo a los grupos evangélicos y otros grupos protestantes, así como a los representantes católicos, judíos, musulmanes, ortodoxos orientales y de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, cuyos miembros asistieron en noviembre a la inauguración del templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días en Arequipa. El consejo continuó interactuando con las comunidades religiosas sobre los reglamentos revisados del gobierno en cuanto a libertad religiosa, protección de la libertad religiosa y asistencia a los venezolanos vulnerables en el Perú.

Los líderes de la comunidad judía dijeron que algunas personas seguían suscribiendo teorías de conspiración de corte antisemita en redes sociales, en particular en reacción a las declaraciones del exgobernador Vladimir Cerrón y del expresidente Alan García. En los medios de comunicación, la mayoría de las respuestas condenaron las declaraciones y publicaciones de Cerrón y García. Sin embargo, algunas personas publicaron comentarios en redes sociales tales como "sus declaraciones (las de Cerrón) no eran una agresión contra los judíos, sólo una crítica de su poder político y económico".

Los miembros de las comunidades musulmana y judía afirmaron una vez más que algunas escuelas públicas y privadas, así como empleadores, exigían ocasionalmente a sus miembros que utilizaran vacaciones acumuladas para las fiestas religiosas no católicas, incluyendo Eid al-Fitr y Yom Kippur, lo que es una opción conforme a la ley.

Los grupos religiosos y las organizaciones interreligiosas siguieron coordinando con el gobierno, la sociedad civil y las organizaciones internacionales para prestar asistencia humanitaria, independientemente de su afiliación religiosa, a algunos de los más de 860.000 venezolanos que ingresaron al país desde 2015, muchos de ellos en situación vulnerable. Varias iglesias evangélicas protestantes y católicas de Tumbes siguieron trabajando con el gobierno, la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para proporcionar alojamiento temporal a los migrantes venezolanos que ingresan por la frontera norte. En abril los miembros del Consejo Interreligioso se reunieron con representantes del ACNUR para coordinar las respuestas del ACNUR a esta crisis, en particular en lo que respecta a vivienda, salud, educación y asesoría sobre la situación migratoria.

Sección IV. Política y Compromiso del Gobierno de los Estados Unidos

Los funcionarios de la embajada volvieron a alentar al gobierno a aplicar imparcialmente la ley de libertad religiosa y sus reglamentos de aplicación a todos los grupos religiosos. Los funcionarios de la embajada conversaron sobre la aplicación de los reglamentos revisados con los funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y abogaron por cambios adicionales para promover el respeto del gobierno por la diversidad religiosa y el tratamiento igualitario de todos los grupos religiosos bajo la ley.

La embajada involucró tanto al gobierno como a los participantes de la sociedad civil en temas de libertad religiosa, incluyendo durante una reunión interreligiosa en abril enfocada en libertad religiosa y tolerancia en el templo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días en Lima.

Los funcionarios de la Embajada se reunieron con representantes del Consejo Interreligioso, académicos, la Iglesia Católica, grupos protestantes y evangélicos, la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, y las comunidades judía y musulmana para hablar de trato igualitario de los grupos religiosos, antisemitismo, aplicación por parte del gobierno de las normas revisadas de libertad religiosa, y registro voluntario de grupos religiosos. Los funcionarios de la embajada alentaron a los grupos religiosos a que colaboraran para prestar asistencia humanitaria a los migrantes venezolanos en el país.